

N/REF: 0017/2023

La consulta plantea si resulta conforme con la normativa de protección de datos la cesión por el Ayuntamiento consultante al Servicio Valenciano de Empleo y Formación de la Comunidad Valenciana, de una copia de las certificaciones individuales acreditativas de las circunstancias reseñadas en la Resolución de 10 de octubre de 2022 del Director General de LABORA — Servicio Valenciano de Empleo y Formación—. La citada cesión de documentación con datos de carácter personal se enmarca en la participación del Ayuntamiento consultante en la convocatoria de subvenciones de los proyectos “*T’avalem*”.

En el apartado Octavo, número 4, de dicha Resolución, se establece la documentación que, con carácter voluntario, podrá aportarse a la correspondiente solicitud en orden a la acreditación de la pertenencia de determinadas personas a los colectivos que se indican, tratándose de colectivos especialmente sensibles, al encontrarse en situación de diversidad funcional en un grado igual o superior al 33% —discapacidad—.

Según se indica en la consulta, la presentación de las *certificaciones individuales* acreditativas de las circunstancias personales exigidas en la convocatoria no debería resultar necesaria, al devenir contraria al principio de proporcionalidad, suponiendo —asimismo— una injerencia en relación con el derecho a la protección de datos de carácter personal.

En su escrito, el órgano consultante mantiene que la emisión de sendas *certificaciones* por parte del Vicesecretario general del Ayuntamiento, en su condición de fedatario público, resultaría suficiente para subvenir al cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, al tratarse de una fórmula menos intrusiva y más proporcional que garantiza, del mismo modo, la acreditación de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención.

## I

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos -**RGPD**-), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -**LOPDGDD**- conforman el marco jurídico de referencia en España que afecta a la protección de datos de carácter personal. En estas normas se regulan los principios y fundamentos a los que deben ajustarse la recogida y tratamiento de

los datos personales por cualquier persona pública o privada que lleve a cabo tratamiento de datos de carácter personal en el ejercicio de su actividad.

Como cuestión previa, y a efectos meramente ilustrativos, conviene referir que, en el momento de emitir el presente informe, *no consta* que, por parte del Ayuntamiento de Valencia, ni de ninguna otra persona física y/o jurídica pública o privada, u órgano administrativo con legitimación suficiente, *se haya procedido a la impugnación* de la Resolución de 10 de octubre de 2022, del Director General de LABORA —Servicio Valenciano de Empleo y Formación—, de la que trae causa la consulta planteada.

Asimismo, también como cuestión previa, debe traerse a colación el **elenco de competencias**, funciones y atribuciones, que, dentro del marco legal aplicable, corresponden al citado Servicio, así como a la Consejería de [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](#), de la Generalitat Valenciana, en la que se incardina.

Pues bien, las citadas competencias, se extraen —básicamente— de lo dispuesto en la **Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell del Govern Valenciano**, en la Ley 3/2000, de 17 de abril, por la que se crea el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, y en el Decreto 216/2020, de 29 de diciembre, del Consell, de aprobación del Reglamento de organización, régimen jurídico y funcional de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Asimismo, debe considerarse lo previsto en el Decreto [5/2019, de 16 de junio, del Presidente de la Generalitat, por el que se determinan el número y denominación de las Consellerias, y sus atribuciones, y en el Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](#).

El artículo 106 de la Ley 27/2018, de 27 diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalidad, modificó el artículo 1 del capítulo I, de la versión anterior de la Ley 3/2000, de 17 de abril, de la Comunidad Valenciana, llevando a cabo la creación del Servicio Valenciano de Empleo y Formación —LABORA—, en los siguientes términos:

“Se modifica el punto 1 del capítulo I, de la Ley 3/2000, de 17 de abril, por la que se crea el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), que queda redactado como sigue: «1. Se crea LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, como organismo autónomo de naturaleza administrativa de la Generalitat. Así mismo, se entenderá que todas las referencias efectuadas a la nomenclatura del organismo autónomo en el título, preámbulo y articulado de la citada norma quedan modificadas en este mismo sentido.»

En la citada Ley 3/2000, de 17 de abril, de la Comunidad Valenciana, se establece —artículo 1.2— que “El Servicio Valenciano de Empleo y Formación,

con **personalidad jurídica propia y plena capacidad** de obrar para el **cumplimiento de sus fines**, estará dotado de autonomía económica y administrativa, así como para la gestión de su patrimonio”, y que —artículo 1.3 — “El Servicio **se adscribe** a la Conselleria de Empleo (actual **Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo**).

En cuanto a sus funciones —artículo 2.1—, señala:

“El Servicio Valenciano de Empleo y Formación tendrá a su cargo el impulso y ejecución de la política de la Generalidad Valenciana en materia de intermediación en el mercado de trabajo y de orientación laboral, y, gradualmente, **las políticas activas de empleo** y de formación profesional, tanto ocupacional como continua de su competencia, que ejercerá interrelacionadamente, **garantizando la gestión territorializada** y cercana al ciudadano y a la ciudadana, y le corresponderá el desarrollo de las siguientes funciones:

a) **La ejecución y control de dichas políticas**, y los programas que la componen, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana y, en su caso, el **ejercicio de la potestad sancionadora** correspondiente. La negrita es nuestra

b) **Ofrecer y prestar servicios de apoyo que faciliten la inserción laboral y la mejora ocupacional, agilizando y optimizando la intermediación de oferta y demanda en el mercado de trabajo**, favoreciendo unidades de desarrollo territorial en comarcas con especial problemática de desempleo, así como ejecutar las competencias en materia de agencias privadas de colocación. La negrita es nuestra

c) La articulación de la colaboración con otras entidades públicas o privadas que participen en el proceso de intermediación laboral.

d) En general, **cualquier otra competencia** que le corresponda en materia de intermediación y orientación laboral, empleo, formación, e inserción laboral y, en especial, la promoción del autoempleo en los llamados yacimientos de empleo, potenciando la formación ocupacional y la interrelación y desarrollo de los subsistemas de formación profesional y la creación de nuevos servicios de orientación y asesoramiento de carácter integral, en las oficinas de servicio al ciudadano y a la empresa, de la manera más efectiva y coordinada, **estableciendo líneas de apoyo especial para colectivos como la mujer desempleada y otros más discriminados.** La negrita es nuestra

A su vez, en relación con el otorgamiento de subvenciones, el artículo 2.3 de la Ley dispone que:

“Respecto del **otorgamiento de subvenciones, su seguimiento, control y comprobación posteriores, no será necesario el consentimiento expreso para acceder a los datos de carácter personal previstos para estos procedimientos**. En todo caso, el acceso a estos datos respetará siempre el principio de proporcionalidad, limitándose a aquellos casos que sean necesarios en cada trámite.” La negrita es nuestra

En relación materia de cooperación interadministrativa, se dispone que:

“Artículo 3. Cooperación.

1. Las distintas administraciones y entidades públicas podrán delegar o, en su caso, encomendar al Servicio Valenciano de Empleo y Formación, **en el ámbito de sus atribuciones, la gestión del ejercicio de determinadas competencias que tengan relación con el objeto y fines del servicio**, de conformidad con lo establecido en la *Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*. La negrita es nuestra

(...)"

El Decreto 5/2019, de 16 de junio, del Presidente de la Generalitat Valenciana, determina el número y la denominación de sus Consellerías, y sus atribuciones, señalando en su artículo 9 que a la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, se le asignan las competencias en materia de economía sostenible, **fomento del empleo y de la economía social**, formación profesional ocupacional y continua, intermediación en el mercado laboral, industria, energía, sectores productivos, comercio interior y exterior, ferias sectoriales y actividades promocionales, artesanía y consumo.

Por su parte, el artículo 1 del Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, dispone (i) en su apartado 1 que "1. La Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo es el departamento del Consell al que corresponde el ejercicio de las competencias en materia de economía sostenible; sectores productivos, industria, energía; comercio exterior; comercio interior, ferias sectoriales y actividades promocionales, artesanía y consumo; así como en materia de fomento de la economía social; fomento de la ocupación, formación profesional ocupacional y continua y la intermediación en el mercado laboral, y señala en su apartado 4 (ii) que "4. Bajo la superior autoridad de la persona titular del departamento, la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, dirige, impulsa y ejecuta la acción política y administrativa en las materias de su competencia y de aquellas que le sean conferidas por la legislación vigente".

Entre las entidades del sector público adscritas y dependientes de esta Consellería, el artículo 4.1 de este último Decreto, prevé que:

"1. Se encuadran en la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, las siguientes entidades del sector público de la Generalitat:

a) **Los organismos autónomos LABORA** Servicio Valenciano de Empleo y Formación y el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT). La negrita es nuestra  
(...)"

En cuanto a la Secretaría Autonómica de Empleo, sus competencias se contienen en el artículo 16, que dispone:

1. **Bajo la autoridad de la persona titular de la Conselleria**, la Secretaría Autonómica de Empleo asume las funciones que le atribuye el artículo 68 de la Ley del Consell, **en materia de trabajo, seguridad y salud laboral**, conciliación laboral, inspección de trabajo y relaciones laborales; **fomento del empleo** e intermediación en el mercado laboral. La negrita es nuestra
2. Especialmente tiene atribuidas las competencias en materia de orientación y formación profesional para el empleo, así como la **inserción en el mercado laboral**. La negrita es nuestra
3. Además, **la Secretaría Autonómica de Empleo será el órgano responsable de la actividad y funcionamiento de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, y ejercerá la dirección de esta entidad** y, por lo tanto, las funciones que le atribuye su ley de creación y la normativa que la despliega. La negrita es nuestra (...)
5. Finalmente, asumirá **cualquier otra competencia** que se le encomiende o delegue o que le **confieran las disposiciones legales o reglamentarias.** La negrita es nuestra

También, como cuestión previa, al versar la presente consulta sobre cesión de datos de especial sensibilidad en materia de diversidad funcional — discapacidad—, procede analizar el marco normativo competencial específicamente aplicable a dicho supuesto en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

En este sentido, en la **Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat**, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, se establecen diversas disposiciones directamente aplicables al supuesto de hecho planteado en la consulta, a saber:

*“Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación de la ley*

1. Constituye el objeto de la presente ley la regulación de la *actuación de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana*, por medio de una **acción coordinada**, dirigida a la atención, promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales, el bienestar y calidad de vida de las personas con discapacidad, posibilitando su autonomía, habilitación, o en su caso, rehabilitación así como su participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, con el fin de asegurar el derecho a la igualdad y dignidad reconocido por la Constitución española y demás derechos protegidos por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. (...) La negrita es nuestra
2. **Será de aplicación a todas las actuaciones** y servicios que, en el ámbito de las personas con discapacidad y dentro del territorio de la Comunitat Valenciana, **lleven a cabo la administración de la Generalitat, o sus entidades autónomas** y las empresas de la Generalitat contempladas en la legislación pública valenciana, **así como las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, y las demás entidades públicas y privadas que colaboren con ellas**. La negrita es nuestra (...)

*“Artículo 4 Principios generales*

**La administración de la Generalitat**, sus entidades autónomas y empresas, **adoptarán las medidas tendentes a promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad** de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por **todas las personas con diversidad funcional o discapacidad** y velará por el respeto de su dignidad inherente rigiéndose en sus actuaciones, de acuerdo con la Convención de la ONU de derechos de las personas con discapacidad, por los principios siguientes:

1. El respeto a la dignidad inherente y la libertad de tomar sus propias decisiones.
2. La autonomía individual y la promoción de la vida independiente, favoreciendo la permanencia en su entorno habitual de convivencia, con la asistencia personal necesaria para cada persona y situación.
3. La igualdad de trato y no discriminación.
- 4. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad y el diálogo civil.**
5. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana.
- 6. La igualdad de oportunidades.**
7. La accesibilidad universal.
8. La igualdad entre mujer y hombre, sin perjuicio del impulso de medidas de discriminación positiva para mujeres y niñas con discapacidad, sujetas a múltiples formas de discriminación.
9. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
- 10. La transversalidad de las políticas, programas y actuaciones impulsadas por la Generalitat en el ámbito social y económico.**
- 11. La responsabilidad pública en la dotación de los medios y recursos necesarios para alcanzar la plena realización de los principios enumerados en el presente artículo.”** La negrita es nuestra

*“Artículo 5 De las competencias de la Generalitat*

**Corresponden a la Administración de la Generalitat, por medio de la Consellería competente** en materia de atención a las personas con discapacidad, entre otras, las siguientes actuaciones:

- a) **Aprobar un Plan Integral de Actuación para las personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana**, de carácter cuatrienal con dotación presupuestaria propia, que tendrá como objetivos orientar, consolidar y establecer prioridades en las actuaciones e inversiones públicas y privadas en la materia objeto de esta ley.
- b) Investigar, formar, sensibilizar y difundir en la realidad que presenta el sector social de las personas con discapacidad, **prestando especial atención a sus características específicas y necesidades.**
- c) **Disponer y organizar la recogida de datos estadísticos elaborando censos específicos de personas con discapacidad y disponer asimismo la recogida de datos específicos de la demanda de servicios existente** y los recursos disponibles, así como identificar nuevas necesidades, todo ello conforme con lo dispuesto en la legislación estatal de protección de datos de carácter personal.



d) **Establecer los criterios de calidad** que han de cumplir todos los centros y servicios que actúen en el ámbito de las personas con discapacidad, con el fin de garantizar las condiciones en que éstos son atendidos. Asimismo, también será **competencia de la Generalitat el establecimiento de mecanismos de supervisión y control de la citada calidad en la actividad de los centros y en la prestación de los servicios generalizados que reciben las personas con discapacidad, sean éstos de titularidad pública, de entidades sin ánimo de lucro o de la iniciativa privada.**

e) **Asesorar y apoyar, técnica y económicamente, a las entidades locales y organizaciones y asociaciones públicas y privadas**, especialmente las de iniciativa social sin ánimo de lucro, que se decidan a colaborar en la creación, gestión, promoción y desarrollo de planes y programas de promoción de las personas con discapacidad; en la creación y gestión de los centros y en la prestación de los servicios regulados por la presente ley. Con este fin, dentro del respeto a la normativa vigente en la materia, se promoverá el establecimiento de los convenios de colaboración y la celebración de conciertos regulados en los artículos 50 y siguientes de la presente ley, que se estimen convenientes para el cumplimiento adecuado de los objetivos previstos legalmente.

f) **Coordinar las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas, sin perjuicio del respeto a su ámbito específico de competencias**, y de la iniciativa social sin ánimo de lucro y privada, a fin de racionalizar y optimizar el uso de los recursos disponibles.” La negrita y el subrayado son nuestros

**“Artículo 7 Cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, a efectos de la concesión de ayudas o subvenciones de la Generalitat**

1. La Administración de la Generalitat, así como sus entidades autónomas y las empresas de la Generalitat contempladas en la legislación pública valenciana, exigirán la acreditación del cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, o en su caso, la exención de dicha obligación, a aquellos empresarios, personas físicas o jurídicas, que soliciten subvenciones o ayudas económicas de la Generalitat.

2. La acreditación de dicho cumplimiento, o en su caso, la exención de dicha obligación **se realizará mediante declaración responsable del solicitante**, sin perjuicio de las facultades de la Generalidad Valenciana de comprobación de la validez de dicha declaración en cualquier momento, así como de la imposición de las sanciones que pudieran corresponder.

3. Sin la acreditación, o en su caso, exención regulados en este artículo, no podrá concederse ayudas o subvenciones.” La negrita y el subrayado son nuestros

**“Artículo 21 Objetivos**

**La conselleria o el organismo de la Generalitat con competencias en materia de empleo y formación profesional o continua, de acuerdo con los artículos**

siguientes, velarán por el disfrute efectivo del derecho de las personas con discapacidad al trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad, sobre la base de la no discriminación y la igualdad de trato y oportunidades, no solo en la ocupación sino en la formación y la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo, y serán los encargados de promover y llevar a efecto políticas de **inserción e inclusión de las personas con diversidad funcional**, prioritariamente en el sistema ordinario o, en su defecto, en el sistema productivo, mediante la fórmula de la ocupación protegida, la finalidad de las cuales será aumentar las tasas de actividad y de empleo e inserción laboral de las personas con discapacidad, como también mejorar la calidad de la ocupación y dignificar sus condiciones de trabajo. La negrita es nuestra

Igualmente, especial atención se dedicará a la orientación, intermediación y apoyo para la formación profesional, para el autoempleo y para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.

*“Artículo 25 Medidas de fomento para la inserción laboral de las personas con discapacidad*

1. La Generalitat llevará a cabo una política de fomento del empleo tendente a facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad y su permanencia en el mercado ordinario de trabajo, desarrollando para ello los diferentes instrumentos de inserción laboral, ayudas económicas y técnicas necesarias para que las personas con discapacidad no se vean excluidas del acceso al mercado laboral. **La conselleria u organismo de la Generalitat competente en materia de empleo, evaluará de forma permanente las posibilidades de integración en el mercado laboral de las personas con discapacidad, fomentando la integración laboral.** La negrita es nuestra

2. Para la integración de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo se **promocionarán aquellos programas dirigidos a la contratación de personas con discapacidad**, a la posibilidad de constituirse en trabajadores autónomos o la de integrarse en empresas de economía social, la reinserción de trabajadores discapacitados y los que vayan destinados a la adaptación de puestos de trabajo. (...)” La negrita es nuestra

*“Artículo 27 bis Empleo público*

**La conselleria u organismo de la Generalitat con competencias en materia de administración pública promoverán y adoptarán las medidas necesarias para el acceso de las personas con diversidad funcional o discapacidad al empleo público y su permanencia en él**, sobre la base de no discriminación y la igualdad de trato y oportunidades. El acceso al empleo público y las vicisitudes en su desempeño, se regirán por lo dispuesto en la normativa específica reguladora de la materia. La negrita es nuestra

## II

El artículo 4.7 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas



físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE -RGPD-, define al **responsable del tratamiento** o responsable como *“la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.”*

El RGPD recoge la necesidad de establecer claramente el mapa de intervinientes en todo tratamiento de datos, al objeto de determinar con acierto la atribución de responsabilidades de acuerdo con la citada norma. Como punto de partida, debemos acudir a lo indicado en el Considerando 79 del RGPD que señala que “(...) La protección de los derechos y libertades de los interesados, así como la responsabilidad de los responsables y encargados del tratamiento, también en lo que respecta a la supervisión por parte de las autoridades de control y a las medidas adoptadas por ellas, requieren una atribución clara de las responsabilidades en virtud del presente Reglamento, incluidos los casos en los que un responsable determine los fines y medios del tratamiento de forma conjunta con otros responsables, o en los que el tratamiento se lleve a cabo por cuenta de un responsable (...)”.

Esta regulación pretende que no queden supuestos de actuación fuera de su ámbito de aplicación, con el fin de dotar a las autoridades de supervisión, de los elementos necesarios para desarrollar su función y, en definitiva, para brindar a los ciudadanos europeos la protección que merecen sus datos de carácter personal. Por tanto, cualquier actividad que conlleve el tratamiento de datos personales será atribuible a algún sujeto que cumpla los requisitos de las distintas categorías que ofrece el RGPD.

En consecuencia, desde el punto de vista de la normativa de protección de datos, la primera cuestión que debe dilucidarse es la determinación del papel de cada uno de los intervinientes en el *procedimiento administrativo de concesión de la subvención* de la que trae causa la consulta, a fin de especificar en quién concurre la condición de responsable del tratamiento, siendo importante señalar que dicho responsable es quien ejerce la decisión efectiva **sobre los fines y los medios** del tratamiento —*ex art 4.7 RGPD*—.

En este sentido, la Generalitat Valenciana dictó la Resolución de 10 de octubre de 2022 del Director General de LABORA —Servicio Valenciano de Empleo y Formación—, *en desarrollo de las competencias* que tiene legalmente conferidas de acuerdo con los preceptos transcritos en el **Punto I** de este Informe, actuando el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, organismo autónomo de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, en calidad de **responsable del tratamiento**.

Esto es, de la descripción y alcance de las competencias de la

Generalitat Valenciana en materia de empleo y de diversidad funcional, se extrae que corresponden a la Comunidad Autónoma Valenciana el desarrollo y ejecución de las políticas activas de empleo, garantizando su gestión territorializada, prestando los servicios de apoyo que faciliten la inserción laboral y la mejora ocupacional, y agilizando y optimizando la intermediación de oferta y demanda en el mercado de trabajo, *ejerciendo dichas competencias a través de sus diversos órganos*.

Específicamente, en el ámbito del otorgamiento de subvenciones de su competencia, se atribuye también a la Generalitat Valenciana el seguimiento, control y comprobación posteriores de estas, no siendo necesario el consentimiento expreso para acceder a los datos de carácter personal previstos para estos procedimientos, desarrollando dicha competencia *a través de sus diversos órganos* y de acuerdo con el régimen de adscripción y atribuciones que sobre estos se contiene en la normativa aplicable.

Asimismo, en materia de fomento de la economía social, fomento de la ocupación, formación profesional ocupacional y continua e intermediación en el mercado laboral, la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, dirige, impulsa y ejecuta, la acción política y administrativa en las materias de su competencia. A su vez, bajo la autoridad de la persona titular de la Conselleria, **la Secretaría Autonómica de Empleo** asume las funciones que le atribuye el artículo 68 de la Ley del Consell, en materia de trabajo, seguridad y salud laboral, y fomento del empleo, y, en especial, la gestión de las políticas orientadas a la inserción en el mercado laboral. En este sentido, **la Secretaría Autonómica de Empleo es el órgano responsable de la actividad y funcionamiento de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, y ejercerá la dirección de esta entidad**.

Por su parte, la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, resulta de aplicación a todas las actuaciones y servicios que —*en el ámbito de las personas con discapacidad y dentro del territorio de la Comunitat Valenciana*— lleve a cabo la administración de la Generalitat, o sus entidades autónomas y las empresas de la Generalitat contempladas en la legislación pública valenciana, así como las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, y las demás entidades públicas y privadas que colaboren con ellas. La administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y empresas, deberán adoptar las medidas tendentes a promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con diversidad funcional o discapacidad.

A su vez, corresponde a la Administración de la Generalitat, por medio de la Conselleria competente en materia de atención a las personas con discapacidad, (i) aprobar un Plan Integral de Actuación para las personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana, (ii) disponer y organizar la recogida

de datos estadísticos, elaborando censos específicos de personas con discapacidad y disponer asimismo la recogida de datos específicos de la demanda de servicios existente, (iii) establecer los criterios de calidad que han de cumplir todos los centros y servicios que actúen en el ámbito de las personas con discapacidad, con el fin de garantizar las condiciones en que éstos son atendidos, (iv) establecer mecanismos de supervisión y control de la citada calidad en la actividad de los centros y en la prestación de los servicios generalizados que reciben las personas con discapacidad, sean éstos de titularidad pública, de entidades sin ánimo de lucro o de la iniciativa privada, (v) asesorar y apoyar, técnica y económicamente, a las entidades locales y organizaciones y asociaciones públicas y privadas, y (vi) coordinar las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas, sin perjuicio del respeto a su ámbito específico de competencias, y de la iniciativa social sin ánimo de lucro y privada, a fin de racionalizar y optimizar el uso de los recursos disponibles.

A mayor abundamiento, en relación con la condición de responsable del tratamiento, conviene recordar lo dispuesto en las **Directrices 7/2020** de 2 de septiembre de 2020, “*Sobre los conceptos de responsable y encargado en el RGPD*”, que han sido objeto de adopción definitiva el 7 de julio de 2021, señalan:

“21. (...) En la mayoría de las situaciones, el «**órgano determinante**» puede **identificarse fácil y claramente por referencia a determinadas circunstancias jurídicas o fácticas de las que normalmente puede inferirse la «influencia», a menos que otros elementos indiquen lo contrario. Se pueden distinguir dos categorías de situaciones: 1) el control derivado de las disposiciones legales; y 2) control derivado de la influencia fáctica. (...)**” (la negrita es nuestra)  
(...)

“24 (...) la ley establecerá una **tarea o impondrá a alguien la obligación de recopilar y tratar determinados datos**. En esos casos, la finalidad de la tramitación suele ser determinada por la ley. El responsable será normalmente el designado por la ley para la realización de este propósito, esta tarea pública (...) De manera más general, la ley también puede imponer a las entidades públicas o privadas la obligación de conservar o facilitar determinados datos. Estas entidades normalmente se considerarían responsables con respecto al tratamiento necesario para cumplir esta obligación.” (la negrita es nuestra)

### III

La normativa de protección de datos contempla diferentes supuestos que pueden dar lugar al tratamiento de datos de carácter personal. De acuerdo con el artículo 6 –“Licitud del tratamiento”–, del Reglamento General de Protección de Datos -**RGPD**–, dicho tratamiento es lícito, y, por tanto, legítimo cuando:

“1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;
- b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
- c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento; (la negrita es nuestra)**
- d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;
- e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; (la negrita es nuestra)**
- f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.”

Esta Agencia Española de Protección de Datos ha tenido la oportunidad de analizar la base jurídica de los tratamientos de datos por las Administraciones públicas en sus Informes jurídicos 108/2018, 155/2018 y **175/2018**. En dichos informes se expone que:

“II

*En cuanto al sentido de la expresión “obligación legal” contenida en el artículo 6.1.c) RGPD, dicha expresión equivale, en la regulación española de protección de datos, a “obligación establecida en una norma con rango de ley”. El art. 53.1 de la Constitución (CE) establece que [l]os derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a). El derecho fundamental a la protección de datos personales se contiene en el art. 18.4 CE, y por tanto le es aplicable la necesidad de una ley para limitar el mismo.*

*A este respecto hay además que señalar que el Tribunal Constitucional ha interpretado los requisitos y circunstancias de la cesión de datos entre Administraciones Públicas, bajo la vigencia de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, (LOPD) en diversas sentencias, entre las que cabe*

destacar ahora la STC 17/2013, de 31 de enero (FJ 4º), y la STC 292/2000, de 30 de noviembre, a que hace referencia la anterior:

*“[...] en la STC 292/2000 declaramos inconstitucional un determinado inciso del apartado 1 del art. 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, por cuanto regulaba la posibilidad de que una norma reglamentaria permitiera la cesión de datos entre Administraciones Públicas para ser empleados en el ejercicio de competencias o para materias distintas a las que motivaron su originaria recogida sin necesidad de recabar previamente el consentimiento del interesado (art. 11.1 LOPD, en relación con lo dispuesto en los arts. 4.1 y 2 y 5.4 y 5), soslayando de esta forma la obligada reserva de ley derivada del art. 53.1 para el establecimiento de la regulación y los límites de un derecho fundamental.*

*En conclusión, tal como establece nuestra doctrina, es claro que la Ley Orgánica de protección de datos **no permite la comunicación indiscriminada de datos personales entre Administraciones Públicas** dado que, además, estos datos están, en principio, afectos a finalidades concretas y predeterminadas que son las que motivaron su recogida y tratamiento. Por tanto, la cesión de datos entre Administraciones Públicas sin consentimiento del afectado, cuando se cedan para el ejercicio de competencias distintas o que versen sobre materias distintas de aquellas que motivaron su recogida, únicamente será posible, **fuera de los supuestos expresamente previstos por la propia Ley Orgánica de protección de datos, si existe previsión legal expresa para ello** [art. 11.2 a) en relación con el 6.1 LOPD] ya que, a tenor de lo dispuesto en el art. 53.1 CE, los límites al derecho a consentir la cesión de los datos a fines distintos para los que fueron recabados están sometidos a reserva de ley. Reserva legal que, como es obvio, habrá de cumplir con los restantes requisitos derivados de nuestra doctrina –esencialmente, basarse en bienes de dimensión constitucional y respetar las exigencias del principio de proporcionalidad– para poder considerar conforme con la Constitución la circunstancia de que la norma legal en cuestión no contemple, por tanto, la necesidad de contar con el consentimiento del afectado para autorizar la cesión de datos.*

*Conforme a nuestra doctrina (STC 292/2000, FJ 16) **corresponde al legislador** determinar cuándo concurre ese bien o derecho que justifica la restricción del derecho a la protección de datos personales y en qué circunstancias puede limitarse. La finalidad de este derecho fundamental es garantizar a la persona un poder de disposición sobre el uso y destino de sus datos con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado, garantizando a los individuos un poder de disposición sobre esos datos, mientras que, **para los poderes públicos, el derecho fundamental a la protección de los datos personales impone la prohibición de que se conviertan en fuentes de esa información sin las debidas garantías**; y también el deber de prevenir los riesgos que puedan derivarse del acceso o divulgación indebidas de dicha información (STC 292/2000, FJ 6 in fine). [...]*”

(...)



*“Hay que recordar que la Administración está vinculada por el principio de legalidad, de manera que, a diferencia de los particulares, tan sólo puede llevar a cabo aquello para lo que el ordenamiento jurídico le permite expresamente. Este es el sentido de lo dispuesto en los artículos 9.1 y 103 de la Constitución, de suerte que cuando la ley y el derecho no han atribuido a la Administración las potestades correspondientes para actuar ante una determinada situación, esa actuación no podrá llevarse a cabo sin que previamente el ordenamiento le atribuya dichas potestades. No existe por tanto un espacio vacío donde a falta de ley pueda la Administración actuar. Es lo que se ha denominado la doctrina de la vinculación positiva de la Administración a la legalidad (García de Enterría). En consecuencia, para que la Administración pueda actuar necesita de una previa habilitación legal (entendida aquí legalidad como habilitación normativa). Y ello tanto si la Administración actúa en el ámbito del derecho público como el ámbito del derecho privado. Así podemos ver que incluso en este último ámbito, en el que actuaría en el mismo rango que los particulares, la Administración necesita una norma que le habilite a actuar.  
(...)”*

*En cualquier caso, el RGPD excluye de la posibilidad de que los tratamientos realizados por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones (sin distinguir si dichas funciones están sometidas al derecho público o al privado) puedan tener como base jurídica del tratamiento la letra f) del art. 6.1 RGPD, esto es, el interés legítimo. Ello, sin duda, porque parte de la base, como demuestra el considerando 45 RGPD, de que cuando se realice un tratamiento de datos en cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento o si es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, dicho tratamiento ha de tener una base en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros. En definitiva, dicho tratamiento de datos estará amparado por la letra e) del art. 6.1 si el derecho aplicable ha atribuido una competencia a la Administración, y no lo estará en caso contrario.  
(...)”*

Así, la Agencia —en el citado **Informe 0175/2018**— sostiene que “Con carácter general, la base jurídica del tratamiento en las relaciones con la Administración, en aquellos supuestos en que existe una relación en la que no puede razonablemente predicarse que exista una situación de equilibrio entre el responsable del tratamiento (la Administración), y el interesado (el administrado) no sería el consentimiento (art. 6.1.a) RGPD), sino, según los casos, el cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.c) RGPD) o el cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e) RGPD).”

A este respecto, el **artículo 8 de la LOPDGDD**, que lleva por rúbrica “Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos”, en su apartado 2, dispone que:

“2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.”



Por consiguiente, para que el tratamiento pueda ampararse en los apartados c) o e) del artículo 6.1 del RGPD, *se requiere que una norma con rango de ley atribuya la competencia*, competencia que, de acuerdo con el principio de vinculación positiva de la Administración a la ley, únicamente podrá ejercerse en los términos y dentro de los límites en que haya sido atribuida por dicha norma legal y, en su caso, por los preceptos reglamentarios que la desarrollen.

A su vez, debe tenerse en cuenta la condición del dato sobre discapacidad, que **es un dato de salud y por tanto está dentro de las categorías especiales de datos que requieren un régimen especial de protección, al que se refiere específicamente el artículo 9 RGPD**.

Así, *en materia sanitaria y de datos de salud*, dicho precepto —bajo el epígrafe “*Tratamiento de categorías especiales de datos personales*”—, establece una regulación específica que incorpora una prohibición inicial de tratamiento y la remoción de esta de acuerdo con determinados requisitos y condiciones:

“Artículo 9 Tratamiento de categorías especiales de datos personales

1. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física.

2. El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las circunstancias siguientes:

a) el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado;

b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el Derecho de la Unión de los Estados miembros o un convenio colectivo con arreglo al Derecho de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del interesado;

c) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o jurídicamente, para dar su consentimiento;

d) el tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales organismos o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los interesados;

e) el tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho manifiestamente públicos;

f) el tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial;

g) el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado;

h) el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el apartado 3;

i) el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional,

j) el tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.

3. Los datos personales a que se refiere el apartado 1 podrán tratarse a los fines citados en el apartado 2, letra h), cuando su tratamiento sea realizado por un profesional sujeto a la obligación de secreto profesional, o bajo su

responsabilidad, de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o con las normas establecidas por los organismos nacionales competentes, o por cualquier otra persona sujeta también a la obligación de secreto de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o de las normas establecidas por los organismos nacionales competentes.

4. **Los Estados miembros** podrán mantener o introducir condiciones adicionales, inclusive limitaciones, con respecto al tratamiento de datos genéticos, datos biométricos o **datos relativos a la salud.**” (la negrita es nuestra)

Es decir, para el tratamiento del dato de discapacidad debería darse alguna circunstancia que exceptuara la prohibición general de tratamiento del apartado 1 del artículo 9 RGPD y además cumplirse un supuesto legitimador del tratamiento de acuerdo con el artículo 6 del RGPD.

Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de los restantes principios previstos en el artículo 5 del RGPD, y en especial el de minimización, pudiendo someterse a tratamiento únicamente cuando sean **adecuados, pertinentes y no excesivos** en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.

Según se ha transcrito, **el artículo 7** de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, bajo el título, “*Cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, a efectos de la concesión de ayudas o subvenciones de la Generalitat*”, dispone en su **apartado 1** —con carácter general— que la Administración de la Generalitat, así como sus entidades autónomas y las empresas de la Generalitat contempladas en la legislación pública valenciana, exigirán la acreditación del cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, o en su caso, la exención de dicha obligación, a aquellos empresarios, personas físicas o jurídicas, que soliciten subvenciones o ayudas económicas de la Generalitat, sin que, en consecuencia, puedan concederse ayudas o subvenciones sin la correspondiente acreditación (apartado 3). Sin embargo, según se observa y analiza, **en el apartado 2 del citado artículo 7**, se dispone que la acreditación de dicho cumplimiento, o en su caso, la exención de dicha obligación se realizará mediante **declaración responsable del solicitante**, sin perjuicio de las facultades de la Generalidad Valenciana de comprobación de la validez de dicha declaración en cualquier momento.

En consecuencia, de dicho precepto cabría deducir que la referida declaración responsable, o, en su caso, la **certificación del Vicesecretario general del Ayuntamiento, a la que se refiere la consulta —en su condición de fedatario público—** resultaría suficiente en orden a la acreditación de los requisitos establecidos en la convocatoria de la subvención de que se trata —Resolución de 10 de octubre de 2022 del Director General de

LABORA—, siguiendo así, en este punto, la interpretación mantenida por el DPD del Ayuntamiento consultante.

De lo anterior se infiere que, a los efectos de analizar la conformidad de los requisitos exigidos en la convocatoria de subvención publicada por la Generalitat Valenciana, la presentación, mediante entrega a la administración convocante, de las certificaciones individuales acreditativas de las circunstancias personales exigidas en la convocatoria **no encajaría en la previsión del artículo 6.1.c) RGPD**, al (i) no resultar necesaria para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, **e incluso (ii) contravenir lo dispuesto** en la norma con rango de ley formal que regula la concesión de subvenciones en el ámbito de la Comunidad Valenciana (artículo 7.2 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat).

#### IV

De tal suerte, resulta necesario proceder a un *análisis adicional de las bases de legitimación de los tratamientos de datos* que, en su caso, ofrezca la cobertura legalmente exigida para llevar a cabo la cesión de los documentos con datos personales relativos a la discapacidad de las personas, entre la administración cedente y la cesionaria.

Tal y como se viene exponiendo, dicho análisis conlleva, necesariamente, la consideración de circunstancias adicionales, en méritos de la especial sensibilidad del dato de discapacidad, al que se confiere una mayor protección. Así, además de la regulación específica del **artículo 9 RGPD**, según dispone el artículo 22 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, ratificado por España mediante Instrumento publicado en el B.O.E de 21/04/2008:

*“Artículo 22. Respeto de la privacidad.*

1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su modalidad de convivencia, será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con discapacidad tendrán derecho a ser protegidas por la ley frente a dichas injerencias o agresiones.
2. Los Estados Parte protegerán la privacidad de la información personal y relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.”

El artículo 4.15 RGPD define como «datos relativos a la salud», aquellos datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física,

incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud.

Por su parte el Considerando (35) RGPD, dispone que “Entre los datos personales relativos a la salud se deben incluir todos los datos relativos al estado de salud del interesado que dan información sobre su estado de salud física o mental pasado, presente o futuro. (...) todo número, símbolo o dato asignado a una persona física que la identifique de manera unívoca a efectos sanitarios; la información obtenida de pruebas o exámenes de una parte del cuerpo o de una sustancia corporal, incluida la procedente de datos genéticos y muestras biológicas, y cualquier información relativa, a título de ejemplo, a una enfermedad, una discapacidad, el riesgo de padecer enfermedades, el historial médico, el tratamiento clínico o el estado fisiológico o biomédico del interesado, independientemente de su fuente, por ejemplo un médico u otro profesional sanitario, un hospital, un dispositivo médico, o una prueba diagnóstica in vitro”.

De todo lo expuesto, se infiere que la información relativa a la condición de discapacidad de un trabajador es un dato de salud, y por tanto debe incluirse dentro de las “*categorías especiales de datos*” de acuerdo con el artículo 9 del RGPD.

A su vez, se han señalado las circunstancias establecidas en el artículo 9 RGPD, que, tras incorporar una prohibición inicial de tratamiento, dispone la eventual remoción de dicha interdicción de acuerdo con determinados requisitos y condiciones, y, en concreto, *en lo que a la consulta planteada interesa*, en su apartado 2:

“9.2. El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las circunstancias siguientes:  
(...) ”

b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el Derecho de la Unión de los Estados miembros o un convenio colectivo con arreglo al Derecho de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del interesado;  
(...) ”

g) el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado;

h) el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los

sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el apartado 3; (...)"

Del análisis de los apartados transcritos —que suponen excepciones legalmente tasadas en orden a la remoción inicial de la prohibición existente respecto del tratamiento de los datos de salud—, se extrae que, (i) **si bien con carácter general**, se atribuye a la administración autonómica —Generalitat Valenciana— un amplio elenco de competencias —*ut supra*— que comprenden la posibilidad de realizar tratamientos de datos sobre discapacidad en orden al desarrollo de sus competencias sobre empleo y/o discapacidad, (ii) **la mera previsión reglamentaria** contenida en la Resolución de 10 de octubre de 2022 del Director General de LABORA, **no enerva los requisitos** establecidos en el supuesto objeto de consulta para salvar la prohibición inicial respecto de su tratamiento, al no quedar justificado que en el supuesto planteado en la consulta la administración cesionaria interese el tratamiento de los datos sobre discapacidad en aras de ninguna de las circunstancias legalmente determinadas —ex artículo 9.2 RGPD—.

Antes, al contrario, como se viene manteniendo, para el supuesto específico planteado por el órgano consultante, la norma de aplicación resulta de clara, directa y expeditiva en relación con el ámbito de que se trata —empleo y discapacidad— desplegándose **la competencia** del responsable del tratamiento **de manera reglada y taxativa** en la **Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat**, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, en los siguientes términos, que se iteran:

***“Artículo 7 Cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, a efectos de la concesión de ayudas o subvenciones de la Generalitat***

**1. La Administración de la Generalitat, así como sus entidades autónomas y las empresas de la Generalitat contempladas en la legislación pública valenciana, exigirán la acreditación del cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, o en su caso, la exención de dicha obligación, a aquellos empresarios, personas físicas o jurídicas, que soliciten subvenciones o ayudas económicas de la Generalitat. La negrita es nuestra**

**2. La acreditación de dicho cumplimiento, o en su caso, la exención de dicha obligación se realizará mediante declaración responsable**



**del solicitante, sin perjuicio de las facultades de la Generalidad Valenciana de comprobación de la validez de dicha declaración en cualquier momento**, así como de la imposición de las sanciones que pudieran corresponder. La negrita y el subrayado son nuestros

**3. Sin la acreditación, o en su caso, exención regulados en este artículo, no podrá concederse ayudas o subvenciones.”** La negrita es nuestra

En consecuencia, la normativa específicamente aplicable no ha considerado en ningún caso, la posibilidad de que el tratamiento de datos al que se refiere la consulta se vea afectado por ninguna de las condiciones establecidas en las letras b), g) y/o h) del apartado 2 del artículo 9 RGPD, disponiendo que la acreditación de que se trata se realice mediante “*declaración responsable del solicitante*”, sin perjuicio de las comprobaciones a las que pudiere haber lugar.

**En resumen, no concurriendo en el supuesto planteado ninguna de las circunstancias descritas en orden a la remoción de la prohibición inicial del tratamiento —ex art. 9.1 RGPD—, no es necesario profundizar en ningún otro argumento, como los referentes a la prevalencia de principios constitucionales y administrativos básicos (jerarquía normativa, seguridad jurídica y legalidad).**

## V

Sin embargo, **nada se opone a que** —en aplicación de los preceptos legales que confieren a la administración autonómica de la Generalitat Valenciana un amplio elenco de competencias en materia de empleo, discapacidad y/o subvenciones, según se anticipó en el **Punto I** de este Informe—, **tanto la propia Generalitat, como sus diversos órganos autonómicos con atribuciones en materia de empleo y/o discapacidad** (tal y como ocurre con LABORA), **desplieguen dichas funciones y competencias** con plena capacidad jurídica y legitimación en orden a la planificación, gestión e impulso de las referidas políticas dentro de su ámbito, referidas, entre otras cuestiones a:

- El impulso y ejecución de la política de la Generalidad Valenciana en materia de intermediación en el mercado de trabajo y de orientación laboral, y, gradualmente, las políticas activas de empleo, garantizando la gestión territorializada.
- La prestación de servicios de apoyo que faciliten la inserción laboral y la mejora ocupacional, agilizando y optimizando la intermediación de oferta y demanda en el mercado de trabajo,
- El establecimiento de líneas de apoyo especial para colectivos como la mujer

- desempleada y otros más discriminados.
- El otorgamiento de subvenciones, su seguimiento, control y comprobación posteriores, no siendo necesario el consentimiento expreso para acceder a los datos de carácter personal previstos para estos procedimientos.
  - El fomento del empleo y de la economía social, formación profesional ocupacional y continua, intermediación en el mercado laboral, industria, energía, sectores productivos, comercio interior y exterior, ferias sectoriales y actividades promocionales, artesanía y consumo.
  - El fomento de la economía social; fomento de la ocupación.
  - La dirección, impulso y ejecución de la acción política y administrativa en las materias de su competencia y de aquellas que le sean conferidas por la legislación vigente.
  - La acción coordinada, dirigida a la atención, promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales, el bienestar y calidad de vida de las personas con discapacidad.
  - La aplicación a todas las actuaciones y servicios que, en el ámbito de las personas con discapacidad y dentro del territorio de la Comunitat Valenciana, lleven a cabo la administración de la Generalitat, o sus entidades autónomas y las empresas de la Generalitat contempladas en la legislación pública valenciana, así como las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, y las demás entidades públicas y privadas que colaboren con ellas.
  - La adopción de las medidas tendentes a promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con diversidad funcional o discapacidad.
  - La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad y el diálogo civil.
  - La igualdad de oportunidades.
  - La transversalidad de las políticas, programas y actuaciones impulsadas por la Generalitat en el ámbito social y económico.
  - La responsabilidad pública en la dotación de los medios y recursos necesarios para alcanzar la plena realización de los principios enumerados en el presente artículo.
  - La aprobación de un Plan Integral de Actuación para las personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana.
  - Investigar, formar, sensibilizar y difundir en la realidad que presenta el sector social de las personas con discapacidad, prestando especial atención a sus características específicas y necesidades.
  - Disponer y organizar la recogida de datos estadísticos elaborando censos específicos de personas con discapacidad y disponer asimismo la recogida de datos específicos de la demanda de servicios existente.
  - Establecer los criterios de calidad que han de cumplir todos los centros y servicios que actúen en el ámbito de las personas con discapacidad, con el fin de garantizar las condiciones en que éstos son atendidos. Asimismo, también será competencia de la Generalitat el establecimiento de mecanismos de supervisión y control de la citada calidad en la actividad de los centros y en la prestación de los servicios generalizados que reciben las personas con discapacidad, sean éstos de titularidad pública, de entidades sin ánimo de lucro o de la iniciativa privada.

- Asesorar y apoyar, técnica y económicamente, a las entidades locales y organizaciones y asociaciones públicas y privadas,
- Coordinar las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas, sin perjuicio del respeto a su ámbito específico de competencias.
- Velar por el disfrute efectivo del derecho de las personas con discapacidad al trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad, sobre la base de la no discriminación y la igualdad de trato y oportunidades, no solo en la ocupación sino en la formación y la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo, y serán los encargados de promover y llevar a efecto políticas de inserción e inclusión de las personas con diversidad funcional.
- La política de fomento del empleo tendente a facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad y su permanencia en el mercado ordinario de trabajo, desarrollando para ello los diferentes instrumentos de inserción laboral, ayudas económicas y técnicas necesarias para que las personas con discapacidad no se vean excluidas del acceso al mercado laboral. La consellería u organismo de la Generalitat competente en materia de empleo, evaluará de forma permanente las posibilidades de integración en el mercado laboral de las personas con discapacidad, fomentando la integración laboral.
- La promoción de aquellos programas dirigidos a la contratación de personas con discapacidad.

No obstante, desde la perspectiva de la protección de datos, para el desarrollo de dichas políticas dentro de su ámbito, además de los requisitos establecidos por el artículo 9.2 RGPD en relación con los datos personales de especial sensibilidad, deberán cumplirse las exigencias derivadas del principio de legalidad, que podrían determinar la inaplicación de aquellos preceptos meramente reglamentarios dictados *contra legem* por el responsable del tratamiento.

En resumen, en atención a lo dispuesto en los artículos 6.1 e), y 9 del RGPD, el tratamiento de los datos de carácter personal derivados de la tramitación administrativa de subvenciones —y la consideración en el correspondiente procedimiento de los datos personales sobre discapacidad de las personas—, **resultará únicamente conforme** con la normativa aplicable en los supuestos en los que **el propio responsable del tratamiento disponga**, previa, coetánea o posteriormente de los referidos datos, **a consecuencia del ejercicio de sus competencias propias, y no como resultado de lo dispuesto en una disposición meramente reglamentaria** que posibilite la comunicación de aquéllos.

Para dicho supuesto, además del contenido de las previsiones normativas con rango de ley formal que amparasen el tratamiento de los datos, deberían tenerse en cuenta los principios de protección de datos, recogidos en el artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos, cuando dispone que:

## “Artículo 5 Principios relativos al tratamiento

### 1. Los datos personales serán:

a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»);

b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);

d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);

e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»);

f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).

2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»).

De acuerdo con todo lo expuesto —y atendiendo a los preceptos legales transcritos en el cuerpo de este Informe—, **no resulta conforme** con la

normativa de protección de datos **la cesión** por el Ayuntamiento consultante al Servicio Valenciano de Empleo y Formación de la Comunidad Valenciana, **de una copia de las certificaciones individuales acreditativas de las circunstancias reseñadas** en la Resolución de 10 de octubre de 2022 del Director General de LABORA —Servicio Valenciano de Empleo y Formación—, **en el marco específico** de su participación en la convocatoria de subvenciones de los proyectos “*T´avalem*”.